

# *Poder Judicial de la Nación*

Buenos Aires, 4 de octubre de 2023.

## AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en la presente causa **CPE 1409/2008/TO1**, caratulada: "**LORO, Claudia Elena; ALIANO, Fernando Darío; ALIANO, Pedro Rodolfo; ALIANO, Marcelo Rodolfo; HARGOUAS, Horacio S/ ART. 210 DEL CP**" (Nro. interno 2953/18), -en lo aquí pertinente- con respecto a **Claudia Elena LORO** (titular del D.N.I. N° 17.806.636, de nacionalidad argentina, nacida el 12/02/1966 en San Martín, provincia de Buenos Aires, con domicilio real en la calle Molière 1366 de esta ciudad, de profesión contadora pública, cuya defensa se encuentra a cargo del Dr. Augusto Ricardo Coronel); y a **Horacio Martín HARGOUAS** (titular del D.N.I. N° 12.291.460, nacido el 05/04/1958 en La Plata, Provincia de Buenos Aires, con domicilio en la Calle n° 35 n° 1571 de La Plata, Provincia de Buenos Aires, de ocupación contador público, cuya defensa técnica es ejercida por el Dr. Alejandro Roberto Montone), del registro de este Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1.

## Y CONSIDERANDO:

1°) Previo a todo, corresponde señalar que -de acuerdo a los requerimientos de elevación a juicio formulados por el representante del Ministerio Público Fiscal de la instancia anterior (Dr. Jorge Dahl Rocha, titular de la Fiscalía Penal Económico N° 11)<sup>1</sup> y la querella<sup>2</sup>- en la presente causa se les atribuyó a los imputados haber tomado parte, en el carácter de jefe (en el caso de Pedro ALIANO), organizadores (en el caso de Marcelo Rodolfo ALIANO y Fernando Darío ALIANO) y en calidad de miembros (respecto de Claudia Elena LORO y Horacio Martín HARGOUAS), de una asociación presuntamente ilícita integrada por los nombrados, la cual habría tenido actividad -por lo menos- durante los años 1998 a

<sup>1</sup> Cfr. fs. 3061/3076.



2005 (en principio hasta el 14/10/2005), que habría estado destinada a cometer una indeterminada cantidad de delitos, en principio tipificados por la ley 24.769, entre otros; ello mediante la creación de personas jurídicas presuntamente ficticias ("usinas" generadoras de comprobantes sin actividad real) para comercializar comprobantes apócrifos y así justificar la compra de bienes y servicios con el objeto que los adquirentes ("usuarios") generasen costos o créditos fiscales ficticios y redujesen -presuntamente en forma indebida- las bases de los cálculos de los tributos a los que se habrían encontrado obligados.

Según la imputación, las "usinas" utilizadas por la organización (que contarían con una existencia solamente en el plano formal, ya que no tendrían una actividad real) resultaban ser las siguientes: RAY MAN S.A.; GOUDGE S.A.; PLUTARCO CONSTRUCCIONES S.A.; SHEPPERTON S.A.; ORION PLUS S.A.; LEONTIEV S.A.; PLANETA CONSULTORA S.A.; DROVEL S.A.; QULNET S.A.; CONSULTORA DRAYER S.A.; EPEO S.A.; NORLINT S.A.; DAYLANSUR S.A.; BENDGAL S.A.; LAUSEY S.A.; PROLAN S.A.; HUATULCO S.A. y PLETHON S.A.

El suceso referido, fue encuadrado por el Ministerio Público Fiscal en las previsiones contenidas en el art. 210 del Código Penal; mientras que la querella lo calificó jurídicamente en los términos del art. 15, inc. "c", de la ley 24.769.

Todo ello, en virtud de las consideraciones que fueron efectuadas por la Fiscalía instructora y la querella en sus respectivos dictámenes, a los que corresponde remitirse en honor a la brevedad.

2°) Que, a fs. 3118/3126, el Sr. Juez instructor decretó la clausura parcial del sumario y ordenó la elevación de la causa a juicio con relación a Pedro Rodolfo ALIANO, Marcelo Rodolfo ALIANO, Fernando Darío ALIANO, Horacio Martín HARGOUAS y Claudia Helena LORO, en orden al hecho detallado en el punto

---

Fecha de firma: 04/10/2023

Firmado por: IGNACIO CARLOS FORNARI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ANDRES JOSE LOPEZ, SECRETARIO DE CAMARA



#30627680#386559147#20231004123604189

## *Poder Judicial de la Nación*

1, calificado como constitutivo del delito previsto y reprimido por el art. 210 del Código Penal.

3°) Que, una vez resuelta una contienda de competencia en razón de la materia -suscitada ante esta instancia oral-, las actuaciones quedaron radicadas ante este Tribunal Oral y se le dio a las actuaciones integración unipersonal en virtud de la vigencia de la ley 27.307 (art. 9 inc. "c" de la citada Ley); cuestión que se notificó a las partes, que no formularon objeción alguna.

4°) Que, a fs. 3516/3518<sup>3</sup> se presentó ante el Tribunal el acuerdo de juicio abreviado suscripto por el Dr. Marcelo Agüero Vera (Fiscal General interinamente a cargo de la Fiscalía General N° 3 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico) con los imputados Pedro Rodolfo ALIANO, Fernando Darío ALIANO, Marcelo Rodolfo ALIANO; Horacio Martín HARGOUAS y Claudia Elena LORO (todos ellos asistidos por sus respectivas defensas técnicas).

Allí, consta que "... en el requerimiento de elevación a juicio obrante a fs. 3061/76vta. se imputó a Pedro Rodolfo ALIANO (en calidad de Jefe), Fernando Darío ALIANO y Marcelo Rodolfo ALIANO (en calidad de organizadores), Horacio Martín HARGOUAS, y Claudia Elena LORO (en calidad de miembros) haber integrado en forma permanente, al menos desde el año 1998 y hasta el 14 de octubre de 2005, una organización dedicada a cometer una indeterminada cantidad de delitos, los que en su gran mayoría, se encontraban tipificados en la Ley 24.769, a través de la comercialización de comprobantes apócrifos emitidos a nombre de empresas ficticias (usinas) creadas por la propia organización, que justificaban compras de bienes y servicios con el objetivo de que sus adquirentes (usuarios) generasen costos y/o créditos fiscales simulados, y de esa manera, redujesen indebidamente la base del cálculo de los tributos a cuyo pago se encontraban obligados. Las usinas



mencionadas habrían sido: Ray Man SA, Goudge SA, Plutarco Construcciones SA, Shepperton SA, Orion Plus SA, Leontiev SA, Planeta Consultora SA, Drovel SA, Quinet SA, Consultora Drayer SA, Epeo Sa, Norlint SA, Daylansur SA, Bendgal SA, Lausey SA, Prolan SA, Huatulco SA y Plethon SA. (...) Por estos hechos, el Sr. Agente Fiscal ha calificado la conducta de Pedro Rodolfo ALIANO, Marcelo Rodolfo ALIANO y Fernando Darío ALIANO, en el marco del art. 210 último párrafo del Código Penal, en calidad de jefe respecto de Pedro Rodolfo y en calidad de organizadores respecto de Marcelo y Fernando ALIANO, en tanto respecto de Horacio HARGOUAS y Claudia LORO, sus conductas han sido calificadas como miembros de la referida organización, en el marco del primer párrafo del art. 210 del CP.- (...) Dicho esto, en punto a la intervención que cupiera en la ilícita organización a Pedro Rodolfo, Marcelo Rodolfo y Fernando Darío ALIANO, el Fiscal entiende que no se ha acreditado a su respecto -con el grado de certeza necesario en esta etapa del proceso- el rol de mando propio de quien ostenta una jefatura, ni el papel fundacional propio de quien organiza, tampoco una actuación preponderante en la conexión de la mayoría de las tareas desplegadas por la asociación, tareas que son asimilables a las funciones gerenciales en la órbita empresaria a modo de ejemplo, se ha secuestrado documentación contable y societaria de las usinas de facturación en los domicilios vinculados a todos los imputados por igual (por caso, el poder general de administración otorgado por la Cooperativa de vivienda, crédito y consumo Osiris Ltda. secuestrado en el domicilio de Av. Corrientes 4595 12° A luce otorgado no sólo a favor de Pedro, Marcelo y Fernando Aliano sino también a favor de Claudia Loro). Otro tanto puede decirse del contenido de las conversaciones telefónicas relevadas en el requerimiento de elevación a juicio, en cuanto a que través de ellas se plasmara la función que cada uno de los intervinientes cumplía en el grupo, intervención que fue

Fecha de firma: 04/10/2023

Firmado por: IGNACIO CARLOS FORNARI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ANDRES JOSE LOPEZ, SECRETARIO DE CAMARA



#30627680#386559147#20231004123604189

## *Poder Judicial de la Nación*

detallada precedentemente y que, como se dijo, puede básicamente segmentarse en confección, comercialización, y registración contable de operaciones comerciales ficticias, y en cuyo contexto se advierten, mayormente situaciones de intercambio de opiniones. Así, con la prueba recibida en la instrucción, se considera que el acuerdo entre los miembros de la asociación se habría producido sin que se advierta situación de liderazgo, seguimiento o articulación en cabeza de Pedro, Marcelo y Fernando Aliano, lo que los coloca en carácter de miembros de la referida organización, desplazándose el encuadre legal que les compete al primer párrafo del art.210 del Código Penal. Dicho esto, a los fines de las penas a solicitar, se ha tenido en cuenta en todos los casos el encuadre legal junto con los demás factores que conforman las pautas previstas en los arts. 40 y 41 del Código Penal. En particular, se advierte respecto de la situación de Claudia Loro y Horacio Hargouas, que la intervención que tuvieran habría estado circunscripta a uno solo de los segmentos que conformaban la actividad de la organización, esto es, el manejo de los aspectos contables e impositivos de las entidades ficticias, en el caso de Hargouas, y respecto de la Cooperativa de vivienda, crédito y consumo Osiris Ltda. en el caso de Loro. Este más limitado aporte al funcionamiento del grupo, entonces, impone una revisión en cuanto a la cuantía de la pena a solicitar en la medida en que -aquella particularidad- hace que el mínimo de la escala penal resulte desproporcionado en función de la culpabilidad por el hecho que les atañe. En función de esto, y teniendo en cuenta lo sostenido en los precedentes 'Goumaz, Alberto Hugo', 'Milne, Sebastián Javier' -del TOPE nro.1-; 'Hamra, Alberto', 'Marullo, Matías Leonel', 'Schafer Ernesto Oscar' y 'Schwiff, Marcelo Leonardo y otro' -del TOPE nro.2-; 'Kachonosky, José Luis', 'Rimasa, Domingo', 'González, Lucas Matías y otros', 'Blanco, Carlos Alberto' y 'Marquez, Marcelino' -del TOPE

Fecha de firma: 04/10/2023

Firmado por: IGNACIO CARLOS FORNARI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ANDRES JOSE LOPEZ, SECRETARIO DE CAMARA



nro.3- en cuanto a que la dosificación punitiva debe respetar el principio de racionalidad de las penas y que no puede sobrepasar la culpabilidad del imputado, es que entiendo que el mínimo de la escala penal previsto por el art. 210 del Código Penal resulta inconstitucional en este caso concreto, por lo que la pena propuesta respecto de Horacio HARGOUAS y Claudia LORO se encuentra por debajo de aquel mínimo legal (...)”.

En función de ello, el Sr. Fiscal General estimó ajustada a derecho la imposición de las siguientes penas: para Pedro Rodolfo ALIANO, Marcelo Rodolfo ALIANO y Fernando Darío ALIANO: TRES (3) AÑOS de prisión en cada caso, cuyo cumplimiento podía ser dejado en suspenso (art. 26 del CP). En relación a Horacio Martín HARGOUAS y Claudia Elena LORO, la pena de DOS (2) AÑOS y SEIS (6) MESES de prisión en cada caso, cuyo cumplimiento podía ser dejado en suspenso.

5°) Que, luego de ello, el apoderado de la querella (A.F.I.P.-D.G.I.) -con fecha 12/08/2021- en oportunidad de contestar el traslado conferido a esa parte, en el marco del Acuerdo de Juicio Abreviado celebrado en las presentes actuaciones, y a los fines del art. 431 bis -apartado 3°- del C.P.P.N., señaló que: "... está en desacuerdo con los términos en los cuales se celebrara el mentado convenio, puntualmente en lo concerniente a la pena solicitada para los imputados Hargouas y Loro... Así las cosas, sostiene esta querella entonces que las pautas que brinda el representante Fiscal no resultan pertinentes para dejar de lado la cuantificación del injusto que, con la imposición de la escala penal, ha realizado el legislador -mínimo de la pena previsto en abstracto para el supuesto del art. 210 del código penal , esto es, 3 años-, en lo que se circunscribe a la imputación atribuida a los imputados Hargouas y Loro (...) Así las cosas, no resulta aplicable al caso la declaración de inconstitucionalidad del mínimo establecido, toda vez que los

Fecha de firma: 04/10/2023

Firmado por: IGNACIO CARLOS FORNARI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ANDRES JOSE LOPEZ, SECRETARIO DE CAMARA



#30627680#386559147#20231004123604189

## *Poder Judicial de la Nación*

montos de pena establecidos en la ley, obedecen a una cuestión de estricta política criminal lo cual resulta inherente a la tarea del legislador, y se encuentra por fuera de las esferas tanto del órgano judicial como así también del Ministerio Público Fiscal... ”.

Finalmente, dejó planteada la reserva de recurrir ante la Excma. Cámara Federal de Casación Penal, como así también la reserva prevista en el art. 14 de la Ley 48 (Cfr. fs. 3517/3519).

6°) Que, se llevó a cabo con posterioridad a ello la audiencia mediante la modalidad de videoconferencia, para tomar conocimiento de visu sobre los imputados, tal como lo prevé el artículo 431 bis, inc. 3° del C.P.P.N.

7°) Que este Tribunal Oral (integrado de manera unipersonal) -en fecha 2 de marzo de 2022- resolvió: **"I. HACER LUGAR** a la solicitud de juicio abreviado y **HOMOLOGAR** el acuerdo presentado por el Ministerio Público Fiscal y los imputados, junto con los respectivos asesoramientos técnicos de sus abogadas/os defensoras/es (art. 431 bis del C.P.P.N.). **II. CONDENAR a Pedro Rodolfo ALIANO**, cuyas demás condiciones personales obran en autos, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita, en calidad de miembro, a la pena de **TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN CUYO CUMPLIMIENTO SE DEJA EN SUSPENSO** (arts. 26, 40, 41, 45 y 210 -primer párrafo- del Código Penal; así como art. 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación). **III. CONDENAR a Marcelo Rodolfo ALIANO**, cuyas demás condiciones personales obran en autos, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita, en calidad de miembro, a la pena de **TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN CUYO CUMPLIMIENTO SE DEJA EN SUSPENSO** (arts. 26, 40, 41, 45 y 210 -primer párrafo- del Código Penal; así como art. 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación). **IV. CONDENAR a Fernando Darío ALIANO**, cuyas demás condiciones personales obran en autos, por considerarlo



coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita, en calidad de miembro, a la pena de **TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN CUYO CUMPLIMIENTO SE DEJA EN SUSPENSO** (arts. 26, 40, 41, 45 y 210 -primer párrafo- del Código Penal; así como art. 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación). **V. CONDENAR a Claudia Elena LORO**, cuyas demás condiciones personales obran en autos, por considerarla coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita, en calidad de miembro, a la pena de **DOS (2) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN CUYO CUMPLIMIENTO SE DEJA EN SUSPENSO** (arts. 26, 40, 41, 45 y 210 -primer párrafo- del Código Penal; así como art. 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación). **VI. CONDENAR a Horacio Martín HARGOUAS**, cuyas demás condiciones personales obran en autos, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita, en calidad de miembro, a la pena de **DOS (2) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN CUYO CUMPLIMIENTO SE DEJA EN SUSPENSO** (arts. 26, 40, 41, 45 y 210 -primer párrafo- del Código Penal; así como art. 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación). **VII. IMPONER LAS COSTAS** del proceso a los condenados, habida cuenta del resultado del proceso (arts. 530, 531 y codtes. del C.P.P.N.; y art. 29 -inc. 3°- del Código Penal). **VIII. TENER PRESENTE** las reservas introducidas por la parte querellante de recurrir ante la Excma. Cámara Federal de Casación Penal; como así también la reserva prevista en el art. 14 de la Ley 48..."<sup>4</sup>.

8°) Contra dicho pronunciamiento, puntualmente en relación a lo resuelto en los puntos dispositivos V y VI del referido decisorio, la parte querellante (representada por el Dr. Nicolás DERTINOPULOS) interpuso recurso de casación, por entender que esa vía resultaba procedente por tratarse de una resolución que ponía fin a la acción; al constituir una sentencia definitiva que le generaba a esa parte un agravio de imposible reparación ulterior, en tanto no se aplicó la escala





## *Poder Judicial de la Nación*

penal establecida en el art. 210 del C.P. y, por ende, se había producido una inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, en los términos del art. 456 inc. 1° del C.P.P.N., por haberse perforado el mínimo de esa escala penal<sup>5</sup>.

Que dicha vía recursiva fue concedida por el suscripto - con fecha 16/06/2022<sup>6</sup>-, y luego mantenida ante la Excm. Cámara Federal de Casación Penal.

9°) Que, en fecha 8 de agosto del corriente año, la Sala I de la Excm. Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, resolvió respecto del recurso de casación interpuesto en el marco del legajo CPE 1409/2008/TO1/CFC3, del registro de esa Sala I, caratulado: "Loro, Claudia Elena y otro s/ recurso de casación", lo siguiente: "... **HACER LUGAR** al recurso de casación deducido por la parte querellante, sin costas; **ANULAR** la resolución recurrida y, en consecuencia, **DEVOLVER las actuaciones al tribunal de previa intervención para que, por quien corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a los lineamientos aquí sentados** (arts. 456, 471 y 530, CPPN). Regístrese, notifíquese, comuníquese al Centro de Información Judicial -CIJ- (Acordada 5/2019 de la CSJN) y remítase al tribunal de origen...<sup>7</sup>; pronunciamiento que al día de la fecha se encuentra firme, conforme la certificación efectuada por el Superior mediante DEO 10928270<sup>8</sup> (el subrayado es de la presente).

En dicho decisorio se estableció que "... el acuerdo formulado puede ser rechazado, aun cuando el motivo no se ciña a alguno de los dos supuestos a los que se refiere el art. 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), en particular cuando la propuesta es portadora de vicios que tornan inválido lo pactado".

<sup>5</sup> Cfr. fs. 3534/3547, según foliatura del Sistema Electrónico Lex 100.

<sup>6</sup> Cfr. fs. 3550 de estos autos.

<sup>7</sup> Registro N° 851/23.



"Sobre el tópico, la doctrina ha señalado que '(L)as alternativas de disconformidad enunciadas en el artículo 431 bis del CPPN no resultan taxativas. Podrá hacerlo en otras, aunque no se encuentre previsión expresa en él [...]' (Palacio, Lino 'El juicio penal abreviado en una de sus primeras aplicaciones', LL, 1997-D-590, citado en Navarro, Guillermo Rafael - Daray, Roberto Raúl, Código Procesal Penal de la Nación, Tomo 3, 4o Edición, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 2010. pág. 299)".

"Muestra de lo expuesto es que, de manera liminar para admitir el acuerdo el tribunal debe verificar que se encuentre dentro del marco legal previsto por el código procesal en la materia y, en ese sentido, no es ocioso recordar que hemos anulado, por ejemplo, acuerdos en los que se pactó una pena de seis años o mayor por no cumplirse con el recaudo que prevé el inciso 1° del art. 431 bis CPPN. (cfr. FCB 49852/2018/TO1/16/CFC6, caratulado 'CORVALÁN, Alejandro Martín y otro s/recurso de casación' rto. el 4/8/22, Reg. 855/22; FRE 6249/2017/TO1/11/CFC1 'GONZÁLEZ BÁEZ, Paulino s/recurso de casación', rto. el 13/3/2020, Reg. 185/20 y FTU 22058/2017/TO1/30/CFC1 'JIMÉNEZ, Néstor Hugo s/recurso de casación', rto. el 17/2/2021, Reg. 79/21)'".

"De manera análoga, en el caso los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa acordaron una sanción de dos años y seis meses de prisión para Claudia Elena Loro y Horario Martín Hargouas, que se encuentra por debajo del umbral mínimo de la escala penal prevista para el delito de asociación ilícita (art. 210 del Código Penal -CP-), pese a la disconformidad de uno de los actores intervinientes -querellante-. Y más allá de la anuencia del juez a quo al admitir ese convenio, lo cierto es que la ley no otorga a las partes la posibilidad de avenir sobre esa materia, por lo que incluirla en lo pactado implicó un apartamiento de las reglas aplicables al caso y un



## *Poder Judicial de la Nación*

cercenamiento indebido de la función jurisdiccional que no debe ser convalidado".

"Ello es así, en la medida en que, conforme a lo normado en el art. 431 bis del CPPN, el margen de disposición de las partes está circunscrito a la conformidad del imputado, asistido por su defensor, sobre la existencia del hecho, la participación que le cupo en éste, la calificación legal en la que se adecuó su conducta y el expreso pedido de pena (nuestro voto en el legajo FSM 35003742/2013/TO1/CFC1 'ÁLVAREZ, Pablo Javier s/recurso de casación' rta. el 5/10/21 Reg. 1840)".

"No se trata de argumentar sobre la razonabilidad del planteo vinculado a la posibilidad de imponer una sanción penal a Loro y Hargouas distinta a la de sus consortes de causa, sino de respetar las reglas establecidas por el art 431 bis, CPPN, en tanto establece un ámbito que puede ser consensuado -y por sobre el que el juez no puede avanzar-, y otro que sigue siendo parte de las potestades jurisdiccionales".

"Si bien es lógica la existencia de convenios previos entre las partes para llegar a un entendimiento y presentar un pacto de juicio abreviado al juez, esa negociación encuentra limitaciones normativas como las ya señaladas, relativas a la pena -debe ser inferior a seis años- y ceñirse exclusivamente a los aspectos que la ley permite concertar".

"En el presente, las partes acordaron sobre un aspecto ajeno a sus competencias, que, únicamente y por la vía constitucional, es de exclusivo resorte jurisdiccional. Es decir, la declaración de inconstitucionalidad que permita en un caso particular perforar el mínimo establecido en la escala penal prevista para un delito, sin que, por otra parte, mediara en la decisión recurrida un pronunciamiento en tal sentido".

"Sobre esa cuestión, vale la pena recordar que el más alto Tribunal de Justicia lleva dicho que la declaración de



inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, pues las leyes dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos en la Constitución Nacional gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente, lo cual obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia. De modo que sólo cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable, dicha declaración será procedente (Fallos 226:688; 242:73 y 300:241, entre muchos otros)".

"Además, una decisión de tal magnitud ausente de esas condiciones desequilibraría el sistema constitucional de los tres poderes, que no está fundado en la posibilidad de que cada uno de ellos actúe destruyendo la función de los otros, sino que lo haga con la armonía que exige el cumplimiento de los fines del Estado y para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales y del poder encargado de dictar la ley (Fallos 285:369 y 314:424, entre otros)".

"En tal sentido, la Corte Suprema ha afirmado que resulta propio del Poder Legislativo declarar la criminalidad de los actos, desincriminar otros e imponer penas (Fallos 275:89), y asimismo aumentar o disminuir la escala penal en los casos en que lo estima pertinente; de tal suerte el único juicio que corresponde emitir a los tribunales es el referente a la constitucionalidad de las leyes, a fin de discernir si media restricción de los principios consagrados en la Carta Fundamental, sin inmiscuirse en el examen de la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones (Fallos 300:642 y 301:341)".

"Se ha consignado además que el principio de legalidad establecido por el art. 18 de la Constitución Nacional (CN), al exigir que la conducta y la sanción se encuentren previstas con anterioridad al hecho por una ley en sentido estricto, pone en cabeza exclusiva del Poder Legislativo la

Fecha de firma: 04/10/2023

Firmado por: IGNACIO CARLOS FORNARI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ANDRES JOSE LOPEZ, SECRETARIO DE CAMARA



#30627680#386559147#20231004123604189

## *Poder Judicial de la Nación*

determinación de cuáles son los intereses que deben ser protegidos mediante amenaza penal del ataque que representan determinadas acciones, y en qué medida debe expresarse esa amenaza para garantizar una protección suficiente, y ello es así ya que '(s)ólo quienes están investidos de la facultad de declarar que ciertos intereses constituyen bienes jurídicos y merecen protección penal, son los legitimados para establecer el alcance de esa protección mediante la determinación abstracta de la pena que se ha considerado adecuada (Fallos: 314:424)''.

"Por su parte, el Poder Judicial tiene la atribución y el deber de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para constatar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas, si las encuentran en oposición con ella (Fallos 308:490)".

"Sin embargo, esa capacidad de control no es irrestricta y debe realizarse con mesura sobre todo cuando la revisión recae sobre la escala punitiva fijada para una figura en concreto como ocurre en autos".

"El análisis que los tribunales deben realizar en esos casos lo es desde un juicio sobre su razonabilidad mediante la confrontación de la ley penal con las normas de jerarquía constitucional que la fundan y limitan, a fin de determinar si la pena cuestionada es irracional o expresa una desmesura extrema entre las privaciones que implica y el disvalor del delito para el que está prevista, al punto de esgrimirse como cruel o repugnante a la dignidad humana (Fallo 314:424)".

"Lo contrario conlleva a reconocer al Poder Judicial la capacidad de someter a sus propios criterios la forma en que deben ser punidas ciertas conductas, usurpando la potestad legislativa en clara contraposición con el principio de división de poderes adoptado por nuestros constituyentes".



"Desde esas aclaraciones, hemos de concluir que la pena mínima establecida por el legislador para la figura prevista en el art. 210 del CP no aparece desmedida ni infringe principios consagrados en la Ley Fundamental, por cuanto su intensidad no es repugnante a la dignidad humana ni se aprecia que la restricción a la libertad que conlleva resulte desproporcionado al disvalor de la conducta que reprime".

"De todo lo expuesto, es posible concluir, además, que no es viable admitir acuerdos contra ley sólo porque tal fue la voluntad de las partes y ello en nada se vincula con el principio de contradicción aludido por el tribunal a quo".

"Al respecto, huelga recordar que en los legajos citados en párrafos anteriores pusimos de resalto que en el instituto del juicio abreviado '(n)o es posible dejar librado al azar la posibilidad de que aquellos que formen parte de un proceso adquieran la potestad de modificar alguna de las reglas contenidas en un código -salvo por la vía constitucional correspondiente-, en tanto sus disposiciones están orientadas, entre otras cuestiones, al resguardo del orden público (cnfr. Precedente 'Jiménez' ya citado)'".

"Lo expuesto precedentemente indica, de acuerdo con los agravios deducidos por la recurrente, que el fallo exhibe un déficit que impide considerarlo como un acto jurisdiccional válido e impone su anulación".

10°) Que, en función de todo lo expuesto, en consideración de los lineamientos sentados en autos por la Excma. Cámara Federal de Casación Penal que han sido transcriptos en el considerando anterior, corresponde emitir un nuevo pronunciamiento en base a las pautas allí desarrolladas. En esa dirección, acogiendo las directrices delineadas por el Superior, teniendo en cuenta que no se le puede imponer a los imputados una pena superior o más grave que la acordada (art. 431 bis apartado 5. del C.P.P.N.) solo cabe rechazar

Fecha de firma: 04/10/2023

Firmado por: IGNACIO CARLOS FORNARI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ANDRES JOSE LOPEZ, SECRETARIO DE CAMARA



#30627680#386559147#20231004123604189

## *Poder Judicial de la Nación*

parcialmente el convenio de juicio abreviado formulado en autos, pero solo en lo atinente a lo pactado en relación Horacio Martín HARGOUAS y Claudia Elena LORO; y establecer la continuación de esta etapa del proceso respecto de los nombrados, en la cual sólo resta proceder conforme lo dispuesto en el art. 359 y concordantes del C.P.P.N.

Tal temperamento no modifica en modo alguno lo resuelto sobre la homologación parcial del convenio de juicio abreviado arribado en relación a Pedro Rodolfo ALIANO, Marcelo Rodolfo ALIANO y Fernando Darío ALIANO; decidida por sentencia que se encuentra parcialmente firme y consentida a la fecha.

11°) No obstante ello, deviene necesario resaltar que el suscripto se encuentra impedido de continuar en el conocimiento de la causa en relación a Horacio Martín HARGOUAS y Claudia Elena LORO (asignando una eventual fecha de debate oral y público en la que se llevaría a cabo el juzgamiento de los nombrados o disponiendo otras medidas a su respecto), por imperio de lo dispuesto en el apartado 4. del art. 431 bis del C.P.P.N., y en función del criterio establecido en numerosos precedentes que profundizan sobre la necesidad de asegurar la imparcialidad del juzgador, como garantía constitucional necesaria para realizar un proceso justo y como expresión del debido proceso (art. 18 de la Constitución Nacional); que a mi modo de ver resultan claramente aplicables al caso.

12°) En efecto, al momento de emitir el referido pronunciamiento, se tuvieron por acreditados los hechos ilícitos atribuidos a Horacio Martín HARGOUAS y Claudia Elena LORO -entre otros imputados- en la requisitoria fiscal de la presente causa y se analizaron numerosos elementos de prueba relacionados a estos eventos a los fines de adoptar la solución arribada en el pronunciamiento aludido.



En consecuencia, resulta evidente que el suscripto no sólo ya ha emitido opinión respecto a la existencia y materialidad delictiva de los hechos atribuidos en estas actuaciones a Horacio Martín HARGOUAS y Claudia Elena LORO, sino que también afirmó la responsabilidad penal de los nombrados en esos hechos (que, vale recordar, son los mismos por los que también dictó sentencia condenatoria contra Pedro Rodolfo ALIANO, Fernando Darío ALIANO, Marcelo Rodolfo ALIANO)<sup>9</sup>.

13°) Que, en esas condiciones, lo expuesto precedentemente da cuenta de una situación objetiva que podría generar sospechas razonables respecto a la imparcialidad del juzgador, la cual, además de ser una garantía sobre la que se apoya nuestro sistema de enjuiciamiento<sup>10</sup>, se encuentra dentro de los derechos implícitos del art. 33 de la Constitución Nacional, deriva de las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio establecidas por el art. 18 de la Carta Magna y se encuentra expresamente reconocida en el art. 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el art. 10 de la Declaración Universal

---

<sup>9</sup> Cabe recordar que según se estableció en la sentencia dictada en autos "... las constancias recolectadas durante la instrucción, valoradas a la luz de las reglas de la sana crítica racional, permiten tener por acreditado -con el grado de certeza exigido para el dictado de una sentencia condenatoria- que, los imputados Pedro Rodolfo ALIANO, Fernando Darío ALIANO, Marcelo Rodolfo ALIANO, **Horacio Martín HARGOUAS y Claudia Elena LORO** formaron parte de una asociación ilícita -cuya actividad se inició, por lo menos, en el año 1998 y continuó ininterrumpidamente hasta el día 14 de octubre del año 2005- que, en forma permanente, estable, duradera en el tiempo y con distribución de roles, se dedicó a cometer y a facilitar la comisión de delitos en forma indeterminada (principalmente evasión tributaria), en tanto que su actividad consistió en la creación y utilización de personas jurídicas 'pantalla' (esto es, sociedades que en su gran mayoría carecían de actividad económica real, pues solo existían formalmente) que utilizaban como 'usinas generadores de comprobantes', para luego comercializar esos comprobantes apócrifos, y así justificar la compra de bienes y servicios, con el objeto de que sus adquirientes ('usuarios') generasen costos y/o créditos fiscales improcedentes a su favor; disminuyendo así -de manera indebida- la base imponible de los tributos que debían ingresar al Fisco Nacional..." (el resaltado es de la presente).





## *Poder Judicial de la Nación*

de Derechos Humanos (que forman parte del bloque de constitucionalidad federal en virtud de la incorporación expresa del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional).

14°) Establecido ello, desde mi perspectiva resulta aplicable al caso la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Lamas" (L. 117. XLIII, de fecha 8/4/2008), en la medida en que al dictar sentencia condenatoria en autos **se tuvo por probada la materialidad delictiva** de los hechos que conforman esta causa, en los que se atribuye participación a los imputados Horacio Martín HARGOUAS y Claudia Elena LORO.

15°) A mayor abundamiento, ha entendido la Excm. Cámara Nacional de Casación Penal que la enunciación de los motivos de excusación o recusación previstos por el art. 55 del código ritual no puede ser tomada como exhaustiva porque el deber de los jueces de excusarse o de aceptar las recusaciones no es de mera raigambre legal, sino emanación del derecho que tiene todo justiciable a ser oído por un juez o tribunal imparcial (conf. arts. 18 C.N. 8.1 de la C.A.D.H., 14.1 PIDCyP, 26 DADH y 10 DUDH) <sup>11</sup>. De ese modo, además de los motivos de excusación o recusación enumerados en el art. 55 del C.P.P.N. deben admitirse otros en la medida en que las circunstancias objetivas del caso concreto pudieran dar lugar a que los intervinientes se vean enfrentados a una duda razonable sobre la imparcialidad de los jueces.

16°) Asimismo, corresponde indicar que un temperamento similar al adoptado aquí, fue seguido por el suscripto en el marco de la causa CPE 428/2018/TO5 (int. 2998/19), caratulada: "KRONEBERGER, CAROLINA ANABEL; KAMPEMEIER, ERIC S/ CONTRABANDO DE ESTUPEFACIENTES" del registro de este Tribunal Oral, para evitar toda afectación a la garantía de la imparcialidad del juzgador, en la que previamente se había dictado sentencia condenatoria -como consecuencia de haberse celebrado un



acuerdo de juicio abreviado- contra dos personas acusadas por el mismo hecho de tentativa de contrabando agravado por el que debía juzgarse a otros coimputados<sup>12</sup>.

17º) En ese mismo sentido, también me pronuncié en diferentes oportunidades: por ejemplo, en la causa registrada bajo el CPE 1561/2018 "Martínez" (con fechas 07/05/21, 20/10/21 y 2/12/21) y el CPE 1561/2018/TO4 "Simoni" (con fechas 2/12/2021 y 18/2/2022); como así también, en los autos registrados bajo el CPE 136/2021/T03 "Duaygües" (con fecha 21/09/2022); y en la causa registrada bajo el CPE 14/2008/TO5 "Minujen" (con fecha 15/12/2022)<sup>13</sup>; entre otras.

18º) Sentado ello, se estima que no resulta necesario profundizar sobre los argumentos ya conocidos respecto a la importancia de la imparcialidad como garantía constitucional necesaria para realizar un proceso justo y como expresión del debido proceso (art. 18 de la Constitución Nacional), que fueran volcados específicamente por la Corte Suprema de Justicia en el citado precedente "Llerena" (Fallos 328:1491).

19º) Que, en consecuencia, bajo tales premisas, corresponde inhibirme de seguir entendiendo en la presente causa en los términos de los arts. 55 y 57, último párrafo, del C.P.P.N.

En orden a lo expuesto;

**RESUELVO:**

**I. RECHAZAR** parcialmente el convenio de juicio abreviado presentado en autos, suscripto por el representante

---

<sup>12</sup> En forma similar, también acepté la inhibición del Dr. Diego García Berro en la causa 617/2015/TO2 (con fecha 17/6/2021), en la que se acusaba a un coimputado por los mismos hechos -y con las mismas pruebas- por los que el referido magistrado había dispuesto la absolución de los demás coimputados.

<sup>13</sup> Vale recordar que en los autos mencionados, la Sala II de la Excma. Cámara Federal de Casación convalidó el apartamiento del suscripto y del Dr. Diego García Berro, con fecha 14/3/2023, en el marco de la causa N° CPE 14/2008/TO5/CFC10 caratulada "Minujen Alejandro y otro s/inhibición" (Reg. Nro. 124/23). Allí se consideró, en esencia, que "... resultan atendibles los argumentos brindados al momento de su inhibición por los jueces Diego García Berro e Ignacio Fornari, en concordancia con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos 'Llerena' (Fallos: 328:1491) y 'Lamas' L. 117. XLIII, rta. 8/04/2008...".



# *Poder Judicial de la Nación*

del Ministerio Público Fiscal y Horacio Martín HARGOUAS y Claudia Elena LORO; sin costas (arts. 431 bis apartado 4 y 530 y cc. del C.P.P.N.).

**II. INHIBIRME** de seguir entendiendo en la presente causa en los términos de los arts. 55 y 57, último párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación.

Regístrese y notifíquese mediante cédulas electrónicas

USO OFICIAL

---

Fecha de firma: 04/10/2023

Firmado por: IGNACIO CARLOS FORNARI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ANDRES JOSE LOPEZ, SECRETARIO DE CAMARA



#30627680#386559147#20231004123604189